Christian Büschges

**Estado, ciudadanía y nación.
Repúblicas liberales y comunidades indígenas
en los Andes sudamericanos durante el siglo XIX¹**

1. Introducción

El nueve de agosto de 2009, en el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nuevo presidente del Ecuador, Rafael Correa, asistió a un acto simbólico de posesión de cargo realizado por dirigentes indígenas en el pueblo de Zumbahua.² Siguiendo un ritual indígena, los “representantes de las taitas y las mamás” entregaron al presidente un medallón con el escudo de la cruz de los pueblos indígenas del país y un bastón espiritual reservado en la tradición a los líderes indígenas. En el acto estuvieron presentes el presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, y la líder indígena guatemalteca, Rigoberta Menchú.

El hecho de que un ritual político indígena fuese incluido entre los actos simbólicos que acompañan la toma de poder de un nuevo presidente de la República demuestra los profundos cambios que ha sufrido el espacio político del Ecuador, y de otros países latinoamericanos, desde principios de los años noventa del siglo XX. Hoy en día, actores, discursos, rituales y símbolos indígenas forman una parte importante de la comunicación política en muchos países latinoamericanos, tanto a nivel local como a nivel nacional e incluso internacional.

Cabe resaltar, sin embargo, que la legitimación étnica de reivindicaciones políticas no es un fenómeno exclusivamente reciente en la historia de América Latina. Durante el período colonial las relaciones de poder estuvieron caracterizadas por fuertes mecanismos de inclusión y exclusión étnica, y también en los nuevos Estados latinoamericanos del siglo XIX las semánticas étnicas continuaron desempeñando

¹ Traducción de Luisa Raquel Ellermeier.

² <www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/55486-NN/correa-toma-posesion-del-cargo-de-presidente-bajo-ritual-indigena/> (27.04.2010).

un papel importante en las representaciones políticas (Büschges/Pott-hast 2001: 602-620). Mientras que en el sistema colonial español la participación política estuvo ligada a la pertenencia a un grupo social definido sobre todo por criterios étnicos, los Estados independientes del siglo XIX postularon la unidad cultural y la igualdad jurídica de todos los miembros de la nación. A pesar de que este nuevo pensamiento político se desarrolló con matices particulares en los diferentes países latinoamericanos, hasta finales del siglo XIX se impuso en el subcontinente la idea de una nación culturalmente homogénea, es decir, la nación mestiza, como el modelo más adecuado para lograr la integración política de una sociedad étnicamente heterogénea. Este modelo asimilatorio fue criticado cada vez más a partir de los años setenta del siglo XX, sobre todo por las organizaciones indígenas en crecimiento (Büschges 2007: 15-35). Fue durante los años noventa cuando finalmente se produjo un cambio político amplio, tanto con respecto a las constituciones como a las prácticas políticas, siguiendo un nuevo modelo de integración política basado en el concepto de un Estado-nación multi-étnico o multi-cultural. Este nuevo modelo de integración política, postula que la diferencia étnica de la sociedad debe expresarse en la diversidad de las formas y espacios de representación y participación política.

En este artículo quiero presentar un esbozo de los actores, discursos y estrategias que acuñaron el proceso de la construcción del Estado, del ciudadano y de la nación en el espacio andino durante el siglo XIX; esbozo que se enfoca en los países de Ecuador, Perú y Bolivia, caracterizados por poseer altos porcentajes de población considerada indígena. El argumento se centra en las negociaciones del nuevo orden político, el importante rol que desempeñaron las semánticas étnicas en este proceso y las críticas al modelo hegemónico de una nación culturalmente homogénea durante la segunda mitad del siglo XIX que, a mi modo de ver, ya dejaban entrever argumentos de las discusiones de finales del siglo XX.

2. El legado colonial

La sociedad colonial de la América hispánica mostró una clara peculiaridad en el contexto del colonialismo europeo de la época moderna. Al contrario de la Norteamérica anglosajona y de la mayoría de las

colonias europeas en Asia y África, se dio allí, primero, una colonización europea significativa en número y con una vasta penetración geográfica, que sin embargo, segundo, no condujo a la erradicación o suplantación de la población aborígen, sino a la convivencia entre españoles, indígenas y afro-americanos, de la cual a su vez, tercero, germinaron extensos grupos de población híbrida.

Durante la expansión española en América, se extendieron en el transcurso del siglo XVI muchos criterios de diferenciación social hacia el otro lado del Atlántico, entre ellos el orden estamental. Adicionalmente, se establecieron nuevas jerarquías y límites sociales que se originaron principalmente en la diversidad cultural americana. En un inicio, la integración de la población indígena mayoritaria dentro del naciente orden social constituyó un desafío singular; posteriormente lo fue la incorporación de los esclavos capturados y traídos desde África y sus descendientes. La esclavitud ya era conocida en España en el siglo XV, como consecuencia de la expansión en el Mediterráneo y en las islas del Atlántico (las Canarias); estando además regulada por la tradición del Derecho Romano. La cuestión del tratamiento y la posición social de la población indígena, en cambio, generó en el siglo XVI un extenso debate jurídico y teológico (Milhou 1994: 274-296). En un principio, la Corona decidió establecer una división espacial entre la población indígena y los inmigrantes españoles, de tal forma que surgieron dos comunidades políticas diferenciadas: la *República de los españoles* y la *República de los indios*.³ En la práctica social, esta división espacial y social entre españoles, indígenas y afro-americanos no se mantuvo de forma estricta, y ello dio lugar a una mezcla biológica progresiva de los tres grupos. En el transcurso del periodo colonial surgió finalmente un jerarquía social basada en criterios étnicos, en cuya cúspide se encontraba la población de ascendencia española, y en la cual regían derechos y deberes sociales y jurídicos específicos para cada uno de los diversos grupos étnicos (incluyendo a grupos híbridos tales como los así llamados mestizos y mulatos, entre otros).⁴

3 Sobre las condiciones de vida de la población indígena durante el periodo colonial: Büschges (2004: 82-97); Jackson (1999).

4 Sobre el orden social del periodo colonial español ver Mörner (1994: 454-504).

Hasta el término de la etapa colonial, la mayor parte de la población indígena vivió en comunidades rurales propias, bajo el poder limitado de gobiernos autogestionarios que eran controlados por funcionarios de la Corona. En las ciudades más grandes, donde se concentraban las clases altas coloniales españolas, la población indígena conformaba a su vez la clase baja, ampliamente concentrada en vecindarios propios y totalmente excluida de desempeñar cargos en las instituciones administrativas reales (localizadas en el centro de la ciudad), así como en los diversos estratos de la Iglesia (English Martin 1996: 196-203).

La respuesta de la población indígena frente a este orden social colonial no fue en absoluto pasiva. Tras una primera fase de rebeliones indígenas que siguieron a la guerra de la conquista en el siglo XVI, las comunidades indígenas empezaron a hacer uso del sistema de Derecho español establecido en América para defenderse de diversas formas de explotación y violencia abierta. Recién en el siglo XVIII, principalmente como consecuencia de diversas medidas de reforma tomadas por la Corona desde la década de 1760, las revueltas indígenas aumentaron nuevamente, sumando más de 100 en total (Andrien 2001: 193-232; Stern 1987a; O'Phelan Godoy 1985). La denominada "Rebelión de Tupac Amaru", que entre 1780 y 1782 abarcó gran parte del territorio que actualmente corresponde a Bolivia y al sur del Perú (Stavig 1999), fue especialmente significativa entre ellas. Este levantamiento resulta de especial interés en virtud de la complejidad de sus objetivos políticos; lo cual se evidencia en la persona y la estrategia del líder de la revuelta, Jose Gabriel Condorcanqui. Éste alegaba descender de la dinastía incaica derrotada por los conquistadores españoles y, bajo esta premisa, tomó el nombre del último soberano inca Tupac Amaru. La rebelión mostró un carácter sumamente heterogéneo, dirigiéndose, en un principio, no contra la soberanía española como tal, sino contra determinadas medidas administrativas —en especial las tributarias—, y contra la arbitrariedad de algunos funcionarios de la Corona. El levantamiento fue acompañado de diversas protestas y disturbios ocurridos a fines de la etapa colonial, llevados a cabo por la población criolla en rechazo a las reformas políticas de la dinastía borbónica. Por esta razón, Tupac Amaru, Tupac Catari y otros importantes líderes indígenas de la rebelión se mostraron prestos a buscar una alianza con la población criolla y mestiza, y reclamaron la expulsión de los españoles

europeos (aquellos que habían inmigrado desde la madre patria), frente a los cuales los criollos se veían desfavorecidos en la adjudicación de cargos administrativos. Por lo tanto, Tupac Amaru no solamente se presentaba a sí mismo como el sucesor del último soberano inca, sino que se atribuyó también la condición de virrey, nombrando además a diversos miembros de su séquito con el cargo de Oidores. No obstante, el éxito de la alianza entre los indígenas y el grupo conformado por criollos y mestizos se daba de forma aislada, generalmente por corto tiempo y principalmente a nivel local. Dicha alianza finalmente colapsó cuando la expansión y la intensidad de violencia de la rebelión aumentaron, y cuando ésta última fue reprimida por las tropas coloniales españolas.

3. De la monarquía hispánica a la república criolla

Las guerras independentistas desatadas en el año 1810 estuvieron ampliamente marcadas por las clases dirigentes criollas, como también por diversos grupos mestizos (Buisson/Schottelius 1980; Lynch 1986). Además de sus objetivos anticoloniales, las acciones de guerra adquirieron en muchos lugares el carácter de una guerra civil, principalmente en vista de la existencia inicial de partidarios de la monarquía española en el bando criollo. Bajo la influencia de la orientación política del movimiento independentista, se asumieron modelos europeos de Estado-nación que fueron sucesivamente adaptados a la realidad americana. Por un lado, los padres fundadores de la patria de las tres repúblicas andinas asumieron el modelo liberal de la nación ciudadana; por el otro, postularon inicialmente la homogeneidad cultural de la nación. Con la finalidad de legitimar la unidad territorial y política de los nuevos Estados-nación frente a la madre patria española y a los Estados americanos vecinos, las élites políticas de las nuevas repúblicas de Ecuador, Perú y Bolivia alegaron la existencia de naciones históricamente constituidas, cuyo origen se remontaba a la época pre-hispánica. De esta manera, los fundadores criollos de la república se apropiaron de la historia indígena, para así justificar la propia independencia con respecto a España y conferir raíces históricas a la nación (Büschges 2002: 67-90). Desde esta perspectiva, los descendientes de la población indígena nativa y los descendientes criollos de los conquistadores españoles conformaron una comunidad histórica inevita-

ble, comunidad que a fines del siglo XVIII se vio oprimida a causa del “absolutismo” español y de la burocracia real, para la cual se reclutaba preferiblemente a españoles europeos. Al igual que en la Europa contemporánea, la “comunidad imaginada” de la nación en las tres repúblicas andinas se basó en una “invención de la tradición”.⁵ Esto ya era reconocible en diversas crónicas y festividades coloniales tardías, en las cuales la historia criolla e indígena constituía la base de la formación de identidades territoriales al interior de la vasta América hispánica (Pagden 1987: 65-80). En el caso de Perú, la construcción del arraigo indígena de la nación se remontó a la soberanía inca pre-hispánica. Por ello, el Congreso Constituyente de la República en dicho país rebautizó las cinco murallas de la fortaleza portuaria del Callao en octubre de 1821 (Quijada 1994: 177-191; Demélas 1992). Se reemplazó “Reina” con “Patria” y “Rey” con el nombre del fundador del imperio Inca, Manco Capac. Otras medidas de esta índole y una institucionalización general del interés por el pasado pre-hispánico –incluido el proyecto de creación de una nueva gramática para la lengua indígena quechua– estuvieron acompañadas por la difusión de los correspondientes símbolos y mitos originarios pre-hispánicos de la nación peruana, con los cuales esta última debía diferenciarse claramente de la conquista española y de los 300 años de soberanía colonial. Recurrir a la civilización inca pre-hispánica servía no solamente para deslegitimar a la conquista española y para legitimizar el derecho a la autodeterminación de la nación histórica peruana; ello determinó también los límites territoriales del Estado nacional imaginado por la élite política peruana, basados en un inicio en la extensión del imperio incaico, que abarcó territorios desde Ecuador hasta el norte de Chile y Argentina y fue considerado por dicha élite como una suerte de “espacio naturalmente peruano”. Por su parte, entre 1835 y 1839 el presidente boliviano Andrés de Santa Cruz reunificó a su país de origen con su vecino del norte, Perú, por medio de una intervención militar. Lo hizo inspirado en la idea de una recomposición del legado político del imperio inca, y ostensiblemente influenciado por su ascendencia mestiza (Morales 2003). Los padres fundadores de Ecuador delimitaron el territorio ocupado recurriendo igualmente a la historia indígena

5 Información general sobre construcción de caracteres en las naciones modernas: Anderson (1988); Hobsbawm (1993: 1-14).

pre-hispánica de su país fronterizo, Perú, pero refiriéndose, en este caso, a la resistencia de la población originaria contra la expansión de los incas en el siglo XV (Salazar 1995).

Mientras se legitimaban los territorios reclamados por las nuevas repúblicas y la postulada unidad de la población, haciendo uso respectivo del arraigo cultural específico de las naciones ecuatoriana, peruana y boliviana, el liberalismo se impuso como la ideología política definitiva en el transcurso de las guerras independentistas. El liberalismo criollo, al igual que en la Europa contemporánea, apuntaba hacia la determinación jurídica y la implementación política de las libertades individuales de los ciudadanos, como requisito para el progreso económico, social y político. A esto se vinculaba el rechazo contra la herencia colonial que constituía la sociedad compuesta por un sistema estamental y corporativo, en la cual los derechos y deberes de los subordinados estaban definidos por su pertenencia a determinados grupos, primordialmente étnicos.

4. Fases de desarrollo de la república liberal

El liberalismo criollo demostró ser la corriente política más temprana y últimamente decisiva en las tres repúblicas andinas durante el siglo XIX. No obstante, su implementación no se efectuó de forma lineal e incuestionada al interior de la élite criolla. Se formó un pensamiento conservador cuyas ideas sociales y políticas se basaban en las tradiciones coloniales tales como la posición privilegiada de la Iglesia y la conservación de jerarquías sociales y étnicas. Estas ideas mantuvieron gran relevancia en las tres repúblicas andinas durante el siglo XIX (Mücke 2007).

En los párrafos siguientes, nos ocuparemos de las ideas de integración política de la población étnicamente diversa planteadas en el marco del liberalismo criollo, y examinaremos las posturas políticas de la población indígena frente a esta corriente liberal.

Es posible diferenciar cuatro fases en el desarrollo del liberalismo criollo durante el siglo XIX. La primera fase se inició en el transcurso de la expansión de la revolución liberal española hacia la región andina (entre 1810 y 1821 aproximadamente). La segunda fase puede ser señalada como el primer apogeo del liberalismo criollo (entre 1821 y 1828). En una tercera fase, se hicieron manifiestos diversos retrocesos

y contradicciones en la implementación del proyecto liberal (aprox. desde 1828 hasta la década de 1850). Finalmente, la cuarta fase trajo consigo la imposición efectiva del orden liberal (década de 1850 hasta fines del siglo XIX).

4.1 Revolución liberal y liberalismo criollo

Al igual que en el resto de la América hispánica, las primeras iniciativas para la implementación del liberalismo en la región andina provinieron de la madre patria; es decir, de las revoluciones liberales que allí se daban (1810-1812) y de la Constitución de Cádiz de 1812, creada como consecuencia de las mismas (Timmermann 2007). En conformidad con sus directivas, y por primera vez durante el vasto dominio que las autoridades reales ostentaron hasta el año 1821, se llevó a cabo diversas elecciones a nivel comunal y provincial en la región andina. En ellas también tomaron parte los pobladores indígenas, a quienes la Constitución les había conferido plena ciudadanía española. Adicionalmente, la nueva Constitución estipuló la abolición del tributo indígena y de los diversos trabajos forzados a los cuales fue sometida la población indígena durante el periodo colonial (la mita entre ellos). En contraste, se mantuvo la esclavitud de la población afro-americana –debido principalmente a la presión ejercida por los representantes americanos en la Asamblea Constituyente de España–, y tanto los mulatos como los negros libres permanecieron excluidos del derecho a voto.⁶

4.2 Primer apogeo del liberalismo criollo

En la etapa final de la guerra por la independencia, entre 1820 y 1825, las regiones andinas central y norte se encontraban bajo la influencia de Simón Bolívar, originario de Caracas, y de José de San Martín, nacido en Buenos Aires. Luego de que el tributo indígena fuese restablecido durante ese breve periodo por el Virrey del Perú –tras la restauración del absolutismo en España en el año 1814–, éste quedó nuevamente abolido por San Martín en 1821 (Lynch 1986: 181, 277). Asimismo, siguiendo el espíritu de la Constitución liberal de 1812, San Martín decretó extender el término y los derechos fundamentales

6 Sobre el debate de la Asamblea Constituyente es adicionalmente instructivo revisar King (1953: 33-64).

del “ciudadano” a la población indígena, y nombrar a todos los grupos poblacionales como “peruanos” (aún con excepción de los esclavos negros).

Después de que San Martín concluyese su participación en la gesta independentista en 1822 y de que Bolívar asumiese el liderazgo político y militar en la región andina central, este último decretó la abolición de la condición jurídica particular y del tributo obligatorio de la población indígena en abril de 1824, poco antes de realizarse la batalla decisiva contra las tropas realistas en la provincia peruana de Ayacucho (Lynch 1986: 181, 278). Ese mismo año, promulgó además un decreto que ordenaba la repartición de las tierras comunales de los pueblos indígenas entre las familias que en ellos residieran. Finalmente, abolió el cargo de *cacique* o *curaca*, para el cual se reclutaba tradicionalmente a personas de la nobleza indígena, y que había constituido un vínculo importante entre las comunidades indígenas y la administración colonial durante dicho periodo.

Todas estas medidas tenían como objetivo desvincular a la población indígena rural de la estructura social estamental de la época colonial. Desde ese momento y en adelante, debían existir en las zonas rurales individuos libres e iguales ante la ley, quienes estarían sujetos a un impuesto común.⁷ Con la supresión de la condición jurídica particular que poseían durante la Colonia, los pobladores indígenas debían convertirse en ciudadanos “instruidos y prósperos” dentro de un Estado-nación criollo-mestizo homogéneo.

4.3 Contradicciones y retrocesos del proyecto liberal

La primera fase del apogeo liberal duró solamente unos pocos años. A partir de 1828, los elementos centrales de la condición particular colonial de la población indígena fueron restablecidos. En dicho año, el Congreso peruano declaró la introducción de la *contribución de indígenas*, con lo cual el tributo indígena colonial fue reinstaurado en la práctica (Turner 1997: 195-197). A pesar de que el proyecto iniciado por Bolívar para la supresión de la propiedad comunal indígena fue ratificado mediante la abolición nominal de la misma, las medidas

7 Peralta (1997: 56). Sobre las reformas liberales respecto de la propiedad de la tierra tratadas en lo sucesivo, ver Jacobsen (1997: 123-170); Langer/Jackson (1997: 171-192); Williams (2003: 697-733).

tomadas para imponer el desarrollo de una propiedad rural individual indígena fueron más bien limitadas. Además, se obstaculizó el despojo de las tierras comunales a favor de terratenientes no indígenas.

Las razones que motivaron esta posición vacilante frente a la propiedad indígena yacían sobre todo en el déficit crónico de los presupuestos nacionales de las nuevas repúblicas. En vista del retroceso –o estancamiento, en el mejor de los casos– del desarrollo económico en la región andina hasta mediados del siglo XIX, el pago de tributos por parte de la comunidad indígena siguió constituyendo la base más significativa y estable de los impuestos recaudados por el Estado.

Las comunidades indígenas fueron nuevamente consideradas entidades propias, de las cuales se responsabilizaban organismos gubernamentales específicos y para las cuales se aplicaban normas de ley propias, siendo la principal de ellas el tributo indígena colonial, recientemente restaurado pero aplicado bajo otro nombre. De esta forma, al interior de las nuevas Repúblicas se reconstituyó en la práctica la existencia de las *dos repúblicas* coloniales.

4.4 Imposición efectiva del orden liberal

Con el apogeo económico que se dio a partir de la mitad de siglo y con la adaptación paulatina del régimen fiscal estatal a nuevas fuentes de ingreso –principalmente los impuestos sobre las propiedades rurales y el comercio– el tributo indígena se fue haciendo cada vez más prescindible para el Estado. En Perú, las contribuciones correspondientes a la exportación del guano –excremento de aves, utilizado como fertilizante– se convirtieron a partir de la década de 1850 en la principal fuente de ingresos del Estado peruano. En Ecuador y en Bolivia, los ingresos por concepto de impuestos del sector agrario aumentaron considerablemente.⁸

Simultáneamente, entre las élites políticas criollas de las tres repúblicas andinas se encendía otra vez la polémica sobre la posición social de la población indígena. A partir de ese momento, los indios fueron vistos como el principal obstáculo para el progreso económico, social y político y se convirtieron en objeto de creciente marginación

8 Sobre el desarrollo económico de la región andina en el siglo XIX ver Albert (1983).

etnocéntrica y de discriminación racial por parte de la mayoría criolla-mestiza (Poole 1997; Mücke 1998; Muratorio 1994).

Con este trasfondo, las repúblicas andinas retornaron las reformas liberales en la década de 1850. La *contribución indígena* fue nuevamente derogada en 1855 en Perú, en 1857 en Ecuador y en 1874 en Bolivia, mientras que en estos tres países se establecieron esporádicamente nuevos impuestos indígenas hasta finales del siglo XIX (Thurner 1997: 208; Aken 1981: 429-459). En la década de 1850, hubo reformas liberales adicionales en Perú, entre ellas la derogación de la cláusula de escritura para cierres de contrato, con la cual se buscaba dificultar la expedición de contratos fraudulentos de compra de terrenos que perjudicasen a la población indígena. El hecho de que no exista ninguna mención sobre las comunidades indígenas en el primer Código Civil peruano de 1852, fue una expresión del espíritu de reforma liberal de aquella época. Además de esto, la historia indígena desapareció completamente de la retórica del Estado-nación, de la historiografía –tanto liberal como conservadora– y de los textos escolares (Larson 2004: 112, 120).

Desde mediados de la década de 1870, en un momento en que el desarrollo económico de las repúblicas andinas ingresaba en una nueva fase de crecimiento orientado a la exportación, dichos Estados procedieron a privatizar en la práctica las tierras comunales indígenas que sólo en teoría habían sido previamente disueltas. Esta política produjo su mayor impacto en Bolivia, país en el cual el porcentaje de población indígena que ocupaba terrenos utilizables para la agricultura se redujo del 50 al 30% entre 1880 y 1930 (Larson 2004: 220ss.).

Observado en conjunto, tenemos que en Bolivia, y aún más en Ecuador y en Perú, se trató de un proceso dinámico, lento y regionalmente diferenciado de modificación en la posesión de tierras. Aparte de la implementación inconsistente de medidas de reforma por parte de los gobiernos nacionales, se debe considerar la oposición indígena contra la disolución de la propiedad comunal de tierras.

5. La población indígena y el Estado-nación

La fase temprana del movimiento independentista y de conformación del Estado, entre 1810 y 1821, ya había sido marcada por la participación política que la población indígena había ejercido a través de di-

versas estrategias. Aun cuando en la región andina no se dio una participación indígena masiva en las acciones de guerra –como sí ocurrió en Nueva España (México)–, determinados grupos indígenas también se unieron a las fuerzas patriotas en esta región. Nos referimos principalmente a Mateo Pumacahua, un descendiente del Inca procedente de la región Cusco, quien en el año de 1814 se unió a la lucha independentista como líder de un grupo conformado por cientos de seguidores indígenas (Lynch 1986: 65-170). Pumacahua había luchado del lado de las autoridades coloniales durante la rebelión de Tupac Amaru, y en 1811 había participado en acciones militares contra combatientes independentistas criollos y mestizos por orden del virrey. Dado que los títulos políticos y militares que recibió en reconocimiento a su participación probaron ser meramente simbólicos, y ante la ausencia de las reformas para mejorar las condiciones de vida de la población indígena que Pumacahua esperaba, éste pasó en 1814 al lado de la resistencia criolla. Sin embargo, solo un año después dicha resistencia ya había sido reprimida por las autoridades coloniales.

5.1 La población indígena y la Constitución de Cádiz

La presencia militar de la población indígena en los movimientos independentistas fue tan significativa como su participación en las elecciones comunales, las cuales fueron llevadas a cabo en conformidad con lo determinado por la Constitución de Cádiz de 1812. De esta forma, aún antes de la Independencia y en un corto periodo de tiempo, se dio un claro aumento de delegaciones de representantes elegidas a nivel urbano y rural: las llamadas *municipalidades constitucionales* (Demélas-Bohy 1995: 291-313). El derecho a voto, adjudicado sin demás limitaciones a todos los *vecinos* “honestos y reconocidos”, fue asumido también por la población indígena (Irurozqui 1996: 724; Rodríguez 2006: 103-123). En las comunidades rurales indígenas, algunos caciques hicieron uso del nuevo sistema electoral para fortalecer su autoridad en las propias jurisdicciones. En las zonas de variedad étnica de las grandes ciudades se produjeron múltiples alianzas entre la población indígena, criolla y mestiza por medio de la nominación y elección de candidatos. La población indígena tuvo un peso importante en estas negociaciones, dado que constituía la mayoría poblacional tanto en las periferias urbanas como en las semi-rurales. Asimismo,

grupos indígenas de la Audiencia de Quito –que más adelante sería Ecuador– exigieron la abolición del tributo indígena que había sido estipulada por la Constitución de Cádiz, con reclamos vehementes en algunas zonas. Simultáneamente a estas exigencias, distribuyeron copias de dicha Constitución. Por esta razón, Federica Morelli habla de un “nuevo sincretismo político” refiriéndose a esta fase en Quito (Morelli 2001: 151-165).

En las siguientes décadas del siglo XIX, la participación de la población indígena en las elecciones se mantuvo mayormente limitada a la administración local (Turner 1997: 201ss.). Desde mediados del siglo XIX, el derecho universal (masculino) al voto sufrió restricciones adicionales en los tres países andinos. A partir de estas restricciones –en especial las referidas a los criterios de la propiedad personal de tierras y la capacidad para leer y escribir–, una gran cantidad de población indígena quedó excluida de las elecciones, pero también otros grupos no indígenas de los estratos medios y bajos de la población (Irurozqui 1996: 201ss.).

5.2 Comunidades indígenas y la República Liberal

Tomando en consideración la vacilante aplicación de las reformas liberales hasta mediados del siglo XIX, en la literatura referida a esta fase se habla frecuentemente de una (re-)indianización de las repúblicas andinas (Turner 1997: 184-185). Las esferas de vida indígenas de la fase temprana de la República se caracterizaron por una gran heterogeneidad. En el campo –donde se concentraba la mayor parte de la población indígena– podía encontrarse, aparte de las comunidades tradicionales, algunos indígenas dedicados de forma individual a la agricultura a pequeña escala, así como familias indígenas asentadas en tierras propias o pertenecientes a criollos o mestizos, que destinaban parte de las horas laboradas al servicio de los terratenientes. Estas diferentes esferas de vida no siempre estaban claramente separadas, de manera que una misma persona podía ser miembro de una comunidad indígena y trabajar simultáneamente para una hacienda privada.

En el aspecto político, las autoridades nacionales y locales de las nuevas repúblicas andinas a menudo apoyaban prioritariamente a las autoridades indígenas tradicionales (caciques o curacas) en desdén de la retórica liberal prevaleciente hasta mediados de siglo. De esta forma,

seguían las tradiciones de la Corona española, que en su época también se había servido de las élites locales indígenas y de los diversos privilegios que éstas tradicionalmente poseían para organizar las labores y tributos que se le exigía a la comunidad (Thurner 1997: 199-201).

No obstante, y siguiendo la tendencia de la época colonial tardía consistente en privar del poder a la antigua nobleza incaica, se procuró la cooptación de nuevas autoridades indígenas locales, las mismas que serían empleadas como funcionarios menores del Estado republicano. Entre ellos se encontraban los alcaldes de indios, quienes se desempeñaban como fuerzas estatales administrativas y policiales en diversas regiones. Dichos alcaldes organizaban las jornadas de trabajo exigidas intermitentemente a los indígenas por parte del Estado, de terratenientes particulares o de las autoridades eclesiales.

La organización social de la población rural indígena se basaba en jerarquías sociales y religiosas que variaban de comunidad en comunidad, así como en amplias redes de parentesco real, electivo o ficticio. En algunas comunidades, la representación política seguía estando conformada por las autoridades tradicionales hereditarias (Guerrero 1990). En otros casos, por ejemplo el de los alcaldes de indios, las autoridades locales eran reclutadas de las jerarquías socio-religiosas respectivas, o elegidas por una asamblea o, en su defecto, asignadas por líderes religiosos, terratenientes o funcionarios estatales criollos o mestizos.

La administración local indígena ha sido poco estudiada hasta la actualidad (Thurner 1997: 201). En algunos casos –siguiendo la tradición colonial– existían consejos municipales (cabildos); en otros casos, había asambleas comunitarias convocadas periódicamente. Las autoridades indígenas locales estaban oficialmente subordinadas a la administración estatal. No obstante, en la mayoría de los casos dichas autoridades estaban vinculadas a representantes de la población criolla o mestiza a través de diversas relaciones de clientelaje. Este complejo sistema de participación política permitía a las comunidades indígenas mantener cierto nivel de autonomía local.

Adicionalmente, las comunidades indígenas hicieron uso de varios otros ámbitos y estrategias de negociación política. De esta forma, las comunidades hacían llamamientos a la justicia estatal o presentaban peticiones ante los organismos públicos para dar a conocer sus intereses; por ejemplo para la defensa de los territorios comunales, o en

caso de abusos por parte de las autoridades criollas o mestizas pertenecientes a la burocracia estatal, al clero o a la clase terrateniente. Otra estrategia indígena para ejercer presión política consistía en el incumplimiento de los tributos especiales y las jornadas de trabajo que les eran exigidos.

En el marco de los antagonismos ideológicos –en ocasiones encendidos– y de las guerras civiles entre liberales y conservadores que se dieron en el transcurso del siglo XIX, surgieron alianzas entre miembros de la población criollo-mestiza y aquellos de las comunidades indígenas. Fue así como los liberales consiguieron que algunas de estas comunidades apoyaran su lucha contra los terratenientes conservadores en diversas regiones de la sierra. Un ejemplo de ello fue la revolución liberal originada en las costas de Ecuador alrededor de 1895 y dirigida por Eloy Alfaro, quien reclutó en sus tropas a algunos oficiales indígenas e inició diversas medidas proteccionistas a favor de la población indígena durante su periodo de gobierno post-revolucionario, entre ellas, la abolición formal de la esclavitud por deudas (práctica extendida en dicha época) (Ayala Mora 1994: 236-241).

Un elemento decisivo para la articulación política de la población indígena se dio a partir de rebeliones que se extendieron más allá del marco local y que fueron en aumento a lo largo del siglo XIX. Entre 1820 y 1899 tomaron lugar 73 revueltas rurales en los andes centrales, de las cuales 62 ocurrieron en el periodo posterior a 1880, tiempo en el que la política de reforma liberal se hizo más estricta (Thurner 1997: 202). Si bien las revueltas indígenas en Ecuador han sido poco investigadas hasta la actualidad, para los casos de Perú y Bolivia existen diversos estudios que dan una idea sobre las esferas de vida social y los intereses políticos de la población indígena en la región andina.⁹

En el caso del Ecuador del siglo XIX se ha estudiado hasta ahora solamente el levantamiento de Fernando Daquilema (1871), originado por abusos en el cobro de los diezmos en la provincia de Chimborazo durante el gobierno conservador de Gabriel García Moreno (Ibarra 1993). En el Perú se han enfocado principalmente las revueltas de la década de 1860, originadas a raíz de la imposición de nuevos impuestos y deberes laborales sobre las comunidades indígenas, en especial

9 Sobre los estudios regionales, ver Stern (1987a).

las rebeliones en las provincias andinas sureñas de Huancané (1866-1868) y Huaylas (1885). En Bolivia, fueron las reformas liberales de la década de 1860 –en particular las privatizaciones forzadas de tierras– las que generaron oposición entre los indígenas y desembocaron en las mayores revueltas de dichas comunidades desde la rebelión de Tupac Catari, ocurrida en la década de 1780 durante el periodo colonial tardío. Al igual que otras revueltas indígenas de la época, esta revolución –ocurrida entre 1869 y 1871– se vinculó con diversos sectores de la población mestiza y criolla en el marco de las disputas políticas nacionales entre representantes de los bandos liberal y conservador, así como entre diversas facciones regionales.

Estas rebeliones fueron, por un lado, expresiones del descontento de la población indígena rural debido al creciente empeoramiento de sus condiciones de vida. Por otro lado, ponen de relieve las formas en que la población rural indígena de la época concebía los conceptos de nación y ciudadanía, los mismos que habían sido ampliamente difundidos por protagonistas criollos y mestizos a nivel del Estado-nación. Los rebeldes indígenas de Huancané exigían a las autoridades estatales “respeto a los derechos” de la población indígena, principalmente el reconocimiento oficial de la tradición legal indígena por parte del Estado. El mestizo Juan Bustamante, quien era quechuahablante y afirmaba descender de Tupac Amaru, fungió como intercesor de los intereses indígenas frente a las autoridades estatales (McEvoy Carreras 1999: 95). El objetivo fundamental de las demandas era asegurar el control de las comunidades indígenas sobre el cobro de impuestos y sobre la elección de las autoridades políticas. Al mismo tiempo, los rebeldes reclamaban su estatus como “ciudadanos” y miembros de la “nación peruana”, a la cual definían como una “asociación política de todos los peruanos” (McEvoy Carreras 1999: 95). Como respuesta a las revueltas en Huancané, el Parlamento Nacional en Lima dispuso en 1867 la supresión del entonces vigente *impuesto extraordinario* de la población indígena (McEvoy Carreras 1999: 99-106; Thurner 1997: 99-136).

Respecto al debate parlamentario, resulta ciertamente de interés el hecho de que varios diputados liberales también apoyasen una tributación aparte para la población indígena, por ver en ella (en el marco de una federalización general del sistema fiscal) la mejor posibilidad para librar a la población indígena de la arbitrariedad propia de la política

paternalista del Estado central, así como para garantizar a dicha comunidad una vía financiera legal de acceso a los servicios públicos (educación, infraestructura, derecho al voto).

Esta concepción política en cuanto a la relación entre el Estado-nación y las comunidades indígenas fue defendida a su vez por los indígenas que participaron en la rebelión de Atusparia (Huaylas) en 1885. Dichos indígenas exigían ser reconocidos por el gobierno nacional y las instituciones públicas locales como “republicanos indígenas del estado peruano”,¹⁰ cuyo fundamento debía consistir en una población indígena moderadamente fiscalizada y provista de derechos autónomos al interior del Estado-nación. Las diversas peticiones indígenas que siguieron a la rebelión entre los años 1886 y 1889 se basaban en este vínculo especial entre el Estado republicano y las comunidades indígenas, consistente en la equidad entre dar (protección estatal a las comunidades indígenas) y recibir (tributos y mano de obra indígenas para el Estado), y que derivaba de la práctica tradicional indígena de la reciprocidad.

En Bolivia también se puede encontrar en las rebeliones de la época una simultaneidad entre el reconocimiento de una nación boliviana que incluyese a todos los sectores de la población y la intención de retener la condición particular de las comunidades indígenas dentro del Estado-nación (Irurozqui 2000: 90). La rebelión indígena dirigida por Pablo Zárate Willka en el año 1899 resulta especialmente instructiva al respecto, dado que Willka planteó en ella un proyecto federal con el cual se pretendía proveer a las comunidades indígenas rurales de autonomía, equidad y respeto cultural dentro de la nación boliviana (Larson 2004: 231ss., 238).

Las investigaciones realizadas mencionan en ambos casos un renovado despertar del “nacionalismo inca”. No obstante, esta nueva referencia a la composición étnica y la organización política precoloniales de la región andina, que podemos identificar en las rebeliones de finales del siglo XIX, no debe ser entendida como un “sueño mesiánico” consistente en la reposición de la soberanía autónoma indígena. Dicha referencia servía más bien para fines de contraste con y rechazo de la hegemonía criolla al interior del sistema estatal republicano exis-

10 Larson (2004: 193); sobre la rebelión de Atusparia en general ver Turner (1997: 99-136).

tente (Platt 1987: 319ss.). En contra de esta última, el proyecto federal de Zárate Willkas –al igual que las rebeliones peruanas de aquella época– apuntaba a una mayor autonomía política de la población indígena dentro del Estado-nación, principalmente con respecto a la regulación de las finanzas y de la propiedad de tierras.

Finalmente, según las fuentes disponibles y el estado de investigación, la rebelión ecuatoriana de Daquilema en 1871 tuvo un impacto más bien local y una tendencia ideológicamente poco ligado al discurso liberal de la época. Este hecho se debe en primer lugar al entorno político conservador durante la presidencia de Gabriel García Moreno y su proyecto de una “modernidad católica” que trató de imponer en el país (Maiguashca 2005: 233-259). Además, las rebeliones indígenas en Bolivia y Perú se desarrollaron en un ámbito internacional, o sea la guerra del Pacífico, que hizo posible si no necesario alianzas “inter-étnicas” que conllevaron también un acercamiento más grande de los actores indígenas a los conceptos políticos que se discutieron a nivel nacional.

6. Conclusión

En el análisis de los objetivos políticos de las mayores rebeliones andinas a fines del siglo XIX, es posible diferenciar dos ramas “clásicas” de investigación.¹¹ En el pasado, las investigaciones más antiguas interpretaban dichas rebeliones principalmente como reacciones locales, defensivas y limitadas contra medidas gubernamentales concretas e incidentes de abusos por parte de las administraciones locales. Esta interpretación niega a dicha resistencia su carácter político. Frente a ello, otros investigadores han resaltado la existencia de tradiciones específicas de resistencia indígena, que articulaban un rechazo categórico contra el orden republicano neo-colonial sobre la base de un “neo-incaísmo”.

La investigación actual enfatiza, en general, el carácter altamente polifacético de las rebeliones indígenas desde fines del periodo colonial hasta la segunda mitad del siglo XIX. Asimismo, señala las peculiares habilidades de la población indígena para lidiar tanto con las ideas y los actores políticos de la monarquía española, como con las

11 Sobre la investigación de las rebeliones indígenas en la región andina a partir del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX, ver Stern (1987b: 3-25).

repúblicas criollas que siguieron a ésta última, de forma tal que pudiesen conservar sus propias tradiciones e intereses dentro del sistema político dado.

Dichas habilidades se pusieron de manifiesto, por un lado, en la composición a menudo multi-étnica de las rebeliones –que estuvieron marcadas por alianzas entre la población indígena, mestiza y criolla; y por otro lado, en el complejo programa político del liderazgo indígena.

El enfoque local de muchas rebeliones indígenas de la época, estimado como apolítico por las investigaciones pasadas, figura como inminentemente político desde esta perspectiva, dado que proponía un modelo alternativo al de la nación de ciudadanos cultural y jurídicamente homogéneos propuesta por la mayoría poblacional criollo-mestiza. Dicho modelo defendía la relativa autonomía política de las comunidades indígenas sin negar la unidad del Estado-nación.¹²

Sin duda, las nociones indígenas respecto a la relación entre el Estado y las comunidades concebidas como aborígenes se refieren a la tradición paternalista-corporativa del concepto colonial de las *dos repúblicas*. Sin embargo, ante el trasfondo del debate actual sobre la definición e implementación de un Estado-nación multi-étnico en las tres repúblicas andinas, estas nociones tienen también un carácter moderno.¹³ Las negociaciones políticas actuales en relación con la representación y participación política de grupos étnicos en el Estado-nación, sobre todo en Ecuador y Bolivia, tuvieron su inicio en las movilizaciones sociales y políticas de las comunidades rurales indígenas durante las décadas de 1960 y 1970. La administración comunal autónoma, que incluye la preservación de determinadas tradiciones culturales, económicas y políticas, constituye hasta la fecha una aspiración central de los movimientos indígenas de la región y un desafío para el sistema estatal y la participación política.

12 En consecuencia, no se trataba de elegir entre una identidad como indígenas o como ciudadanos, como Marta Irurozqui opina (Irurozqui 2000: 99).

13 Sobre los movimientos indígenas del presente, ver Yashar et al. (2004); Warren/Jackson (2002).

Bibliografía

- Aken, Mark J. van (1981): "The Lingering Death of Indian Tribute in Ecuador". En: *Hispanic American Historical Review*, 61, 3, pp. 429-459.
- Albert, Bill (1983): *South America and the World Economy from Independence to 1930*. London/Basingstoke: Macmillan.
- Anderson, Benedict (1988): *Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts*. Frankfurt am Main/New York: Campus.
- Andrien, Kenneth J. (2001): *Andean Worlds. Indigenous History, Culture, and Consciousness under Spanish Rule, 1532-1825*. Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 193-232.
- Ayala Mora, Enrique (1994): *Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Buisson, Inge/Schottelius, Herbert (1980): *Die Unabhängigkeitsbewegungen in Lateinamerika, 1788-1826*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Büschges, Christian (2002): "Nationalismus ohne Nation? Spanien und das spanische Amerika im Zeitalter der Französischen Revolution". En: *Comparativ*, 12, 4, pp. 67-90.
- (2004): "Die Erfindung des Indianers. Kolonialherrschaft und ethnische Identität im spanischen Amerika". En: Beck, Thomas/Dos Santos Lopes Hanenberg, Mari- lia (eds.): *Barrieren und Zugänge. Die Geschichte der europäischen Expansion*. Wiesbaden: Harrassowitz, pp. 82-97.
- (2007): "La etnicidad como recurso político. Etnizaciones y de-etnizaciones de lo político en la América Andina y Asia del Sur". En: Büschges, Christian/Bustos Lozano, Guillermo/Kaltmeier, Olaf (eds.): *Etnicidad y poder en los países andinos*. Quito: Corporación Editora Nacional, pp. 15-35.
- Büschges, Christian/Potthast, Barbara (2001): "Vom Kolonialstaat zum Vielvölkerstaat. Ethnisches Bewusstsein, soziale Identität und politischer Wandel in der Geschichte Lateinamerikas". En: *Geschichte in Wissenschaft und Unterricht*, 52, 10, pp. 602-620.
- Deas, Malcolm (1985): "Venezuela, Colombia and Ecuador: the first Half-century of Independence". En: Bethell, Leslie (ed.): *Cambridge History of Latin America*, Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, p. 516.
- Demélas, Marie-Danielle (1992): *L'invention politique. Bolivie, Equateur, Pérou au XIX^e siècle*. Paris: Ed. Recherche sur les Civilisations.
- Demélas-Bohy, Marie-Danielle (1995): "Modalidades y significación de elecciones generales en los pueblos andinos, 1813-1814". En: Annino, Antonio (ed.): *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*. México, D.F.: FCE, pp. 291-313.
- English Martin, Cheryl (1996): "Indigeneous People". En: Schell Hoberman, Louisa/Migden Socolow, Susan (eds.): *The Countryside in Colonial Latin America*. Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 196-203.
- Guerrero, Andrés (1990): *Curagas y tenientes políticos. La ley de costumbre y la ley del Estado: Otavalo 1830-1875*. Quito: El Conejo.

- Hobsbawm, Eric J. (1993): "Introducción". En: Hobsbawm, Eric J./Ranger, Terence (eds.): *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1-14.
- Ibarra, Hernán (1993): "*Nos encontramos amenazados por todita la indiada*". *El levantamiento de Daquilema (Chimborazo, 1871)*. Quito: CEDIS.
- Irurizqui, Marta (1996): "Ebrios, vagos y analfabetos. El sufragio restringido en Bolivia, 1826-1952". En: *Revista de Indias*, LVI, 208, p. 724.
- (2000): "The Sound of the Potutos. Politicization and Indigenous Rebellions in Bolivia, 1826-1921". En: *Journal of Latin American Studies*, 32, 1, p. 90.
- Jackson, Robert H. (1999): *Race, Caste, and Status. Indians in Colonial Spanish America*. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Jacobsen, Nils (1997): "Liberalism and Indian Communities in Peru, 1821-1920". En: Jackson, Robert H. (ed.): *Liberals, the Church, and Indian Pasants. Corporate Lands and the Challenge of Reform in Nineteenth-Century Spanish America*. Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 123-170.
- King, James F. (1953): "The Colored Castes and American Representation". En: *Hispanic American Historical Review*, 33, 1, pp. 33-64.
- Langer, Erik D./Jackson, Robert H. (1997): "Liberalism and the Land Question in Bolivia, 1825-1920". En: *Liberals, the Church, and Indian Pasants. Corporate Lands and the Challenge of Reform in Nineteenth-Century Spanish America*. Albuquerque: University of New Mexico Press, pp. 171-192.
- Larson, Brooke (2004): *Trials of Nation Making. Liberalism, Race, and Ethnicity in the Andes, 1810-1910*. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
- Lynch, John (1986): *The Spanish American Revolutions 1808-1826*. New York: Norton.
- Maiguashca, Juan (2005): "El proyecto garciano de modernidad católica". En: Irurizqui, Marta (ed.): *La mirada esquiiva. Reflexiones históricas sobre la interacción del estado y la ciudadanía en los Andes*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 233-259.
- McEvoy Carreras, Carmen (1999): *Forjando la nación: ensayos de historia republicana*. Lima: Pontificia Univ. Católica del Perú.
- Milhou, Alain (1994): "Die Neue Welt als geistiges und moralisches Problem (1492-1609)". En: Bernecker, Walther L. et al. (eds.): *Handbuch der Geschichte Lateinamerikas*. Vol. 1: *Mittel-, Südamerika und die Karibik bis 1760*. Stuttgart: Klett-Cotta, pp. 274-296.
- Mörner, Magnus (1994): "Die sozialen Strukturen im Wandel". En: Bernecker, Walther L. et al. (eds.): *Handbuch der Geschichte Lateinamerikas*. Vol. 1: *Mittel-, Südamerika und die Karibik bis 1760*. Stuttgart: Klett-Cotta, pp. 454-504.
- Morales, Waltraud Q. (2003): *A Brief History of Bolivia*. New York: Facts On File.
- Morelli, Federica (2001): "Un sincretismo político. Representación, política y sociedad indígena durante el primer liberalismo hispanoamericano, el caso de la Audiencia de Quito". En: Krüggeler, Thomas/Mücke, Ulrich (eds.): *Muchas Hispanoamérica: antropología, historia y enfoques culturales en los estudios latinoamericanistas*. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, pp. 151-165.

- Mücke, Ulrich (1998): *Das Indianerbild des peruanischen Liberalismus im 19. Jahrhundert*. Hamburg: LIT.
- (2007): *Gegen Aufklärung und Revolution. Die Entstehung konservativen Denkens in der iberischen Welt (1770-1840)*. Köln/Wien: Böhlau.
- Muratorio, Blanca (ed.) (1994): *Imágenes e Imagineros. Representaciones de los indígenas ecuatorianos, siglo XIX y XX*. Quito: FLACSO Ecuador.
- O'Phelan Godoy, Scarlett (1985): *Rebellions and Revolts in Eighteenth Century Peru and Upper Peru*. Köln: Böhlau.
- Pagden, Anthony (1987): "Identity Formation in Spanish America". En: Canny, Nicolas/Pagden, Anthony (eds.): *Colonial Identity in the Atlantic World, 1500-1800*. Princeton: Princeton University Press, pp. 65-80.
- Peralta, Víctor (1997): "Comunidades, Hacendados y burócratas en el Cusco, Perú, 1826-1854". En: Reina, Leticia (ed.): *La Reindianización de América, siglo XIX*. México, D.F.: CIESAS, p. 56.
- Platt, Tristan (1987): "The Andean Experience of Bolivian Liberalism, 1825-1990: Roots of Rebellion on 19th-Century Chayanta (Potosí)". En: Stern, Steve J. (ed.): *Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries*. Madison: University of Wisconsin Press, pp. 280-320.
- Poole, Deborah (1997): *Vision, Race, and Modernity. A Visual Economy of the Andean Image World*. Princeton: Princeton University Press.
- Quijada, Mónica (1994): "De la colonie à la république. Inclusion, exclusion et mémoire historique au Pérou". En: Guerra, François-Xavier (ed.): *Mémoires en devenir. Amérique Latine XVI^e-XX^e siècle*. Bordeaux: Maison des pays ibériques, pp. 177-191.
- Rodríguez, Jaime E. (2006): *La revolución política durante la época de la independencia. El Reino de Quito 1808-1822*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, pp. 103-123.
- Salazar, Ernesto (1995): *Entre mitos y fábulas: el Ecuador aborigen*. Quito: Corporación Ed. Nacional.
- Stavig, Ward (1999): *The World of Tupac Amaru. Conflict, Community, and Identity in Colonial Peru*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Stern, Steve (ed.) (1987a): *Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries*. Madison: University of Wisconsin Press.
- (1987b): "New Approaches to the study of Peasant Rebellion and Consciousness: Implications of the Andean Experiences". En: Stern, Steve (ed.): *Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries*. Madison: University of Wisconsin Press, pp. 3-25.
- Timmermann, Andreas (2007): *Die "gemäßigte Monarchie" in der Verfassung von Cádiz (1812) und das frühe liberale Verfassungsdenken in Spanien*. Münster: Aschendorff.
- Turner, Mark (1997): *From Two Republics to One Divided: Contradictions of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru*. Durham/London: Duke University Press.

- Warren, Kay B./Jackson, Jean E. (eds.) (2002): *Indigenous Movements, Self-Representation, and the State in Latin America*. Austin: University of Texas Press.
- Williams, Derek (2003): "Popular Liberalism and Indian Servitude: The Making and Unmaking of Ecuador's Antilandlord State, 1845-1868". En: *Hispanic American Historical Review*, 83, 4, pp. 697-733.
- Yashar, Deborah et al. (2004): *Citizenship and Ethnic Politics in Latin America, United Nations Development Programme*. Human Development Report Office, Background paper 2004/16 (<www.hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2004/papers/hdr2004_deborah_yashar.pdf>; 10.07.2008).